

La construcción del miedo

Episodios de la guerra

contra el gobierno

de la ciudad de México

Raquel Sosa Elízaga*

* *Doctora en Historia.
Profesora del Centro
de Estudios
Latinoamericanos
de la Facultad
de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM.*

Durante los años neoliberales, las confrontaciones políticas dejaron de aparecer como tales y se identificaron como “amenazas a la seguridad pública”. Particularmente después de la caída del muro de Berlín, los gobiernos y fuerzas políticas conservadores consideraron que no habría más alternativas al dominio del pensamiento único y estigmatizaron cualquier expresión opositora como ilegítima, atentatoria contra el orden establecido, indeseable e inaceptable.

En América Latina, como en otras partes del mundo, se transformaron los conceptos y las formas de nombrar a los fenómenos sociales. De la “seguridad nacional” se pasó a la “seguridad pública”. De la “violencia política” al “terrorismo” y la “subversión”. Del reconocimiento y la confrontación con sujetos y programas alternativos, a la invisibilización de los otros y su señalamiento como amenazas sin rostro al orden y al Estado. Es por eso que la pobreza se tornó peligrosa y su combate en la forma de programas para la desarticulación y fragmentación de la voluntad organizada, prioritario.

Pese a todos los esfuerzos realizados, las organizaciones y redes sociales y políticas en contra del orden neoliberal han subsistido y, como es bien sabido, lo han hecho no sólo en tanto expresiones de denuncia, sino de manera articulada, con acciones de solidaridad internacional y, excepcionalmente, desde el gobierno.

La ciudad de México tiene, desde 1997, gobiernos democráticamente electos, pese a que no se le reconozca plena soberanía como entidad federativa en el país. Decisiones como el volumen de endeudamiento público, el nombramiento del secretario de Seguridad Pública y del procurador de Justicia, para dar dos ejemplos, deben darse desde el Congreso de la Unión o la Presidencia de la República, respectivamente, y no se reconoce como congreso estatal a la Asamblea Legislativa, como gobernador al jefe de Gobierno, ni se han descentralizado funciones básicas como la educación.

Dichas limitaciones no han sido obstáculo para que, particularmente en los últimos años, se construya en la ciudad una opción social y política democrática, basada en la justicia social, que se plantea como alternativa al régimen neoliberal, expresado por el gobierno federal. En efecto, pese a que el actual poder ejecutivo está en manos de un partido distinto al que gobernó el país a lo largo de casi todo el siglo XX, no se ha producido un solo cambio significativo y, más bien, lo que se ha consolidado pese a todas las resistencias es el dominio neoliberal. Sólo que ahora, la alianza entre el viejo partido dominante y el nuevo partido en el gobierno –PRI y PAN por sus siglas¹–, conocida en los sectores democráticos como PRIAN, se ha convertido en el dique que la dominación ha impuesto en contra de la opción de un cambio verdadero en el país y en la ciudad.

La ciudad de la esperanza

Bajo la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el año 2000 se instituyó en la ciudad un programa de gobierno que tiene como lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, y cuya orientación se sintetiza en el reconocimiento y las garantías al ejercicio de derechos sociales como educación, salud, empleo, vivienda; el establecimiento del derecho a una pensión universal ciudadana y al apoyo a personas con discapacidad; la atención médica y medicamentos gratuitos a población excluida de la seguridad social; el impulso a la economía y sustentabilidad de la ciudad mediante la construcción de obras de infraestructura, mejoramiento a la vialidad, drenaje y agua potable; el reordenamiento territorial y el remozamiento de la imagen urbana, particularmente en el Centro Histórico.

En materia de seguridad pública, el gobierno ha señalado como principio que el combate a la delincuencia sólo podrá tener éxito si se atacan las causas de desintegración

“El mayor embate de las fuerzas conservadoras se dio a partir del mes de junio, en que comenzó a presentarse a la ciudad como la de ‘más alta incidencia delictiva’, la ‘más peligrosa’ del país. [...] En ese clima, se convocó por todos los medios a una manifestación en el centro de la ciudad en la que debía expresarse la insatisfacción de los ciudadanos contra la inseguridad pública”

y violencia familiar y comunitaria, exclusión de los jóvenes y abandono social, que en buena medida han dado origen a conductas antisociales. Distingue, por ello, las tareas de inteligencia y fuerza que deben destinarse a combatir el crimen y la delincuencia organizada del trabajo de atención social, prevención y protección a la población en situación de riesgo, particularmente los jóvenes y las familias que habitan en barrios de alta incidencia delictiva o de origen de los 27 mil reclusos de las cárceles de la ciudad.

Así, mientras que este año al programa social se destinan en conjunto recursos equivalentes a la quinta parte del presupuesto de la ciudad, se realizan de manera cada vez más eficaz acciones y programas interinstitucionales de prevención al delito, particularmente con jóvenes. Ello ha hecho posible la disminución de todos los delitos al nivel en que se encontraban en 1994, el año en que comenzaron a dispararse en la ciudad y en el país. No debiera olvidarse que precisamente a partir de estos años se produjeron en el país el recrudescimiento de la política neoliberal y diversos enfrentamientos de las fuerzas del orden público y de grupos paramilitares con expresiones de inconformidad y búsqueda de alternativas como las de las organizaciones indígenas.

Por su parte, una política ejemplar y eficaz, como la realizada en estos años en la ciudad de México, ha dado recientemente lugar a dos efectos significativos: la consolidación del liderazgo del jefe de Gobierno, quien pasó a encabezar las encuestas sobre la candidatura presidencial en 2006, y el acuerdo entre las fuerzas y partidos conservadores en contra de la opción que representa y, desde luego, del éxito de su programa. La construcción de una polaridad en la que un extremo se empeña en aparecer como representación de la estabilidad y el orden y mostrar al otro como el caos, la ruptura del estado de derecho, pasó a ser, desde los primeros meses de este año, el objetivo de una derecha cada vez más fanática y más intolerante, pero sobre todo, más opuesta a atender

las exigencias de la sociedad en torno al cambio democrático y la justicia social, de las últimas seis décadas de la historia de México.

Primer episodio: ¿corrupción en el gobierno?

El programa de gobierno se ha construido a partir de la austeridad, convertida en ley a partir de febrero de 2004. Los sueldos de altos funcionarios de gobierno han sido reducidos, y ahora tienen un tope salarial; se ha disminuido a cinco el número de asesores por secretaría; se han eliminado por completo gastos superfluos como viajes, viáticos, remodelación de oficinas, vehículos de lujo, pago de escoltas, etc.; y se han limitado gastos en telefonía, fotocopiado, combustible, adquisición de bienes informáticos y otros. Se han establecido, además, contralorías ciudadanas en todos los comités y subcomités de adquisiciones y obras, y se han hecho públicos contratos y facturas de las adquisiciones más importantes del gobierno.

Todos estos ahorros y la rendición de cuentas han dado lugar a que la gente adquiera confianza en que el presupuesto del gobierno está destinado a llevar a cabo programas en su beneficio y no, como antes ocurría, a la corrupción de altos funcionarios públicos. Por ello, el descubrimiento de un complejo entramado de corrupción, que incluía al secretario de Finanzas del gobierno y al líder de la bancada del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa, así como al menos dos jefes delegacionales perredistas en la ciudad, provocó un gran escándalo, que durante semanas fue ampliamente difundido por los medios masivos de comunicación con el objeto de desprestigiar al gobierno y restarle popularidad.

A los descubrimientos de corrupción siguieron, sin embargo, los inicios de una investigación a fondo y la persecución judicial de los responsables, así como el deslinde del jefe de Gobierno de los hechos en que sus antiguos colaboradores habían sido involucrados. Pocas semanas después del inicio del escándalo, la investigación arrojó como resultado que un empresario de la construcción de origen argentino, Carlos Ahumada, vinculado con el senador panista Diego Fernández de Cevallos y con el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, había fraguado no sólo la corrupción de los funcionarios, sino la filmación de los hechos que dieron lugar al escándalo, y su entrega a los medios de comunicación.

El complot contra el jefe de Gobierno, conocido en sus detalles y reconocido ampliamente por la opinión pública como tal, no sólo no disminuyó su popularidad, sino que la acrecentó, alcanzando en las encuestas más del 70% y la primera preferencia entre los posibles candidatos presidenciales para 2006 entre marzo y abril de este año.

Segundo episodio: ¿ingobernabilidad?

El mayor embate de las fuerzas conservadoras se dio a partir del mes de junio, en que comenzó a presentarse a la ciudad como la de “más alta incidencia delictiva”, la “más peligrosa” del país. El presidente de la República contribuyó, en diversos discursos en los estados considerados como de mayor criminalidad, a tratar de crear psicosis y desmentir cifras oficiales otorgadas por el gobierno de la ciudad. En ese clima, se convocó por todos los medios a una manifestación en el centro de la ciudad en la que debía expresarse la insatisfacción de los ciudadanos contra la inseguridad pública. La denuncia de las pretensiones de la organización derechista *El yunque* de conducir la marcha obligó a sus principales dirigentes a permanecer ajenos al evento. Y la intervención de diversos contingentes de otros estados del país impidió que la protesta se dirigiera expresamente, como se planeó inicialmente, en contra del gobierno de la ciudad de México.

La convocatoria, reiterada a lo largo de tres semanas en prensa y televisión, dio como resultado una manifestación silenciosa de grandes proporciones. Era notoria la participación de empresarios, profesionistas y empleados corporativos, así como de sectores medios. El reclamo antigubernamental, que se generalizó entre los manifestantes, obligó al presidente a declarar su “compromiso” con la disminución de la incidencia delictiva en 45 días (lo que, por supuesto, no ocurrió).

El jefe de Gobierno, por su parte, evitó confrontaciones con los asistentes al acto. Insistió en que respetaba el dolor de las víctimas de la delincuencia, pero no dejó pasar el hecho de que entre los organizadores del evento se encontraran representantes de las fuerzas conservadoras de la ciudad y el país. Reiteró su estrategia de combate al crimen e invitó a los convocantes a la marcha a las reuniones cotidianas del gabinete de seguridad. De acuerdo con los gobiernos de entidades vecinas, reforzó la colaboración interestatal en el combate al crimen.

Cuando una o dos semanas después de ocurrida la manifestación en la ciudad se entregó casa por casa una historieta para informar de la política de seguridad pública del gobierno, las encuestas volvieron a indicar la consolidación de la popularidad del jefe de Gobierno.

Tercer episodio: ¿desacato a la autoridad?

Ha sido a partir del mes de julio que ha recrudecido un intento de desafuero y destitución del jefe de Gobierno a partir de un presunto desacato a la autoridad judicial en el caso de un predio conocido como El Encino, en la delegación Cuajimalpa de la capital.

El predio fue expropiado a inicios del año 2000 por el gobierno de Rosario Robles, pero su dueño se amparó hacia fines de ese año contra la expropiación. El objetivo del gobierno al llevar a cabo esa medida había sido construir una vía de acceso rápida a un hospital privado, y las obras se habían iniciado a mediados de 2000. Cuando el juez dictó la suspensión y concedió el amparo, las obras se interrumpieron por orden del secretario de Gobierno del GDF (Gobierno del Distrito Federal). No obstante, el dueño volvió a inconformarse y exigió que se retirara de inmediato del predio toda maquinaria del gobierno, lo que ocurrió en cuanto se produjo la orden del juez. Sin embargo, el dueño acusó al GDF de desacato a la autoridad, y el Ministerio Público ordenó que se iniciaran averiguaciones en contra de quien resultara responsable.

Luego de interrogar a varios funcionarios públicos sin encontrar evidencias físicas o declarativas del desacato, el Ministerio Público concluyó que a quien había que responsabilizar era al Jefe de Gobierno, por ser el “responsable en última instancia” de todas las acciones de gobierno de la ciudad. El procurador general de Justicia solicitó entonces a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que iniciara el juicio de procedencia y que, de encontrar elementos, ordenara el desafuero y destitución del jefe de Gobierno. El PRI y el PAN, mayoría en el Congreso de la Unión, han aprovechado la ocasión para amenazar con que votarán a favor del desafuero. No existe sin embargo una sola evidencia física ni escrita de que se haya cometido delito alguno, y en los días en que concluimos este trabajo se inaugura el camino alterno que se construyó fuera de los terrenos de El Encino, en cumplimiento de la orden del juez.

El 29 de agosto el Partido de la Revolución Democrática convocó a una manifestación masiva –reputada como la mayor de la historia política del país– contra el intento de desafuero del jefe de Gobierno en la que participaron cientos de miles de ciudadanos. Dos días después, la ciudad amaneció sitiada con policías federales e integrantes del Estado Mayor Presidencial, con la intención de evitar toda expresión de descontento con motivo del informe del presidente de la República, que fue recibido con protestas por los diputados del PRI y del PRD, y con diversas manifestaciones de inconformidad de los sindicatos por la recientemente aprobada contrarreforma a la seguridad social. El acallamiento de las protestas es, indudablemente, el signo más ominoso de los acontecimientos de los tiempos recientes. Contradictorio es, igualmente, el llamado del presidente a reiniciar un diálogo con las fuerzas opositoras, particularmente los sindicatos.

Puede decirse así que en la ciudad y en el país se enfrentan dos proyectos de nación claramente delineados, y cuyos principios son contrapuestos. Por una parte, el proyecto expresado por Andrés Manuel López Obrador en veinte puntos durante la manifestación del 29 de agosto, que incluye la reivindicación de la identidad y soberanía nacional; la defensa de las industrias nacionales de energía eléctrica y petróleo; la reactivación de la

industria y de la actividad agraria; la promoción del empleo, la vivienda, la seguridad social; la defensa de los migrantes; la inversión en salud y educación; el establecimiento de la pensión universal de los adultos mayores a nivel nacional; el otorgamiento de la autonomía a los pueblos indígenas; la defensa de la cultura; la restricción de la intervención del ejército a la defensa de la soberanía y el apoyo a la población en casos de desastres, pero no en conflictos de origen social; la prevención al delito y la atención a las problemáticas de violencia y desintegración familiar, particularmente entre los jóvenes y sus familias, así como el reforzamiento de la actividad de inteligencia para el combate a la delincuencia organizada; la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción; la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía en las acciones de gobierno.

Por otra parte, el programa neoliberal tiene en su agenda la desnacionalización del petróleo y la energía eléctrica; la consumación de la contrarreforma de la seguridad social, que pone en manos privadas y hace pesar a los trabajadores el costo del mantenimiento de sus pensiones; políticas de combate a la pobreza focalizadas y en las que se condiciona el ejercicio de derechos a la aplicación de controles de asistencia y cumplimiento; negación y ausencia de diálogo con las comunidades indígenas; dependencia financiera externa y parálisis productiva.

La población tiene elementos suficientes para tomar decisiones. Lo único que se requiere es que pueda tomarlas, en su momento, en las urnas, sin que sean violentados sus derechos. Depender de la construcción del miedo, del uso faccioso de los aparatos políticos y del poder judicial, o del ejercicio del terror, sería una pésima apuesta para mantener a toda costa el orden neoliberal.

Notas

1 PRI: Partido Revolucionario Institucional; PAN: Partido Acción Nacional.